



Pensionistas vascos se manifiestan cerca del Parlamento vasco, en Vitoria, exigiendo pensiones dignas. E. M.

El doble de cupo por las pensiones

● El País Vasco debería aportar otros 1.500 millones en su pago al Estado para hacer frente a la parte que le corresponde del agujero en el sistema ● Fedea subraya: la aportación vasca «no está en línea con su renta»

DANIEL VIAÑA / ALEJANDRA OLCESE MADRID
 El País Vasco debería abonar el doble en concepto de cupo para aportar la parte que le corresponde del agujero de las pensiones. Serían unos 1.500 millones adicionales al año, cifra que se sumaría a los cerca de 1.600 millones que, efectivamente, abona el territorio vasco en concepto de los servicios que el Estado sigue prestando en la comunidad.

El cálculo corresponde a Diego Martínez, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador asociado de Fedea, y lo obtiene de la siguiente manera: toma el déficit real (sin transferencias del Estado) de 25.000 millones de euros que arrastra el sistema de pensiones, le aplica el 6,24% al que asciende el índice de imputación del cupo y el resultado son esos 1.500 millones. De hecho, es algo más,

pero en cualquier caso una cifra muy elevada a la que cree que el País Vasco debería hacer frente. Porque la diferencia entre las cotizaciones sociales y lo que se abona en pensiones, asumida por el Estado, no forma parte de las materias que están transferidas, ni mucho menos.

«La teoría es que tú tienes que coger los Presupuestos Generales del Estado, ver qué no se ha transferido y pagar un 6,24%», ahonda el director de Fedea, Ángel de la Fuente, que junto al propio Martínez y a José María Durán, profesor de la Universidad de Barcelona y director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), participó ayer en una jornada **sobre fiscalidad organizada junto al Consejo General de Economistas**.

De la Fuente insistió, como ya ha hecho en numerosas ocasiones, en la opacidad que existe en torno al cálculo del cupo. Durán expuso que

«mientras el resultado del sistema foral sea tan favorable para estos territorios en comparación al resto de comunidades, difícilmente tendremos en España un sistema de financiación que no sea cuestionado por comunidades que, por sus características y al ver los resultados del sis-

Una Hacienda catalana es una «barbaridad», avisa De la Fuente

Dar impuestos a Cataluña sería ir hacia un modelo «confederal»

tema foral, también lo pidan». Y Martínez subrayó que la aportación de País Vasco y también la de Navarra «no se corresponde con su renta relativa ni con el tratamiento que reciben otras comunidades en esta dimensión», para a continuación incidir sobre el aspecto de las pensiones: «Habría que revisar no solo la contribución a la nivelación autonómica, sino también a la cobertura del desfase entre ingresos y gastos de la Seguridad Social».

Esta necesidad de que los territorios forales tengan en cuenta el déficit de la Seguridad Social a la hora de calcular la aportación que hacen al Estado es más acuciante desde que el sistema necesita para cuadrar sus cuentas transferencias millonarias procedentes de esta administración, que se financian con la recaudación de impuestos. El problema está en que esos ingresos tribu-

tarios proceden de todas las comunidades autónomas salvo de País Vasco y Navarra, por lo que con lo que pagan en impuestos todo el resto de españoles se financian las pensiones de todos, incluidas las suyas. Fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad Social aseguran a EL MUNDO que este aspecto sí se tiene en cuenta a la hora de calcular el cupo, pero resulta llamativo que los expertos de Fedea estimen que haría falta duplicarlo para que fuera así.

En 2023, las transferencias del Estado ascendieron a 38.688 millones, más del doble de los 15.537 millones que hicieron falta hace diez años, según los presupuestos de 2013, y casi seis veces más que lo que se transfirió en 2008 (6.739 millones).

Volviendo a la jornada ayer celebrada, en el acto también se debatió la posibilidad de que se dé forma a una suerte de Agencia Tributaria ca-

talana, algo que propuso el independentismo y que el líder del PSC y ganador de las recientes elecciones, Salvador Illa, también defiende. «Si estamos hablando de un consorcio a 15 más uno, me parece una buena idea. Si estamos hablando de 15 consorcios diferentes a dos, me parece muy mala idea. Especialmente si esos consorcios acaban transformándose en agencias, entidades independientes unos de otros», apuntó De la Fuente, que definió la idea como una «barbaridad» y alertó de que aumentará el fraude.

El responsable de Fedea también rechazó la posibilidad de que Cataluña recaude el 100% de los impuestos. «Sería un problema porque supondría una mutación en la natura-

ELECCIONES 12-M

MAYORÍAS SÓLIDAS.

El Círculo de Economía pidió ayer un pacto en el Parlamento de Cataluña tras las elecciones que permita «forjar mayorías sólidas», ya que una repetición electoral «podría aumentar la desafección de la ciudadanía respecto a la mecánica democrática».

PACTO FISCAL.

Este 'lobby' aprovechó para pedir al Gobierno que solucione «el problema de la infrafinanciación crónica de la Generalitat», ya que el actual modelo de 2009 «no garantiza la suficiencia financiera» de las comunidades porque «es opaco y profundamente injusto». Cada región debe «gestionar y recaudar sus tributos», reclaman.

leza del Estado. Iríamos hacia una estructura confederal en la que además los ricos tendrían la capacidad de quedarse con casi todo el excedente que ahora aportan a la caja común, que es lo que financia no solo la liberación territorial, sino básicamente las políticas sociales en el conjunto del país», avisó.

Analizó, además, qué ocurriría si además de Cataluña también la Comunidad de Madrid e Islas Baleares exigiesen lo mismo. «Si los tres que pueden aportar están fuera, no habrá nada que repartir y, además quedaría un Estado muy raro, sin acceso a bases tributarias propias que viviría de la caridad de los territorios, algunos de los cuales no le tienen especial cariño», dijo. «Supondría cargarnos el Estado que tenemos. No solo en cuestiones de solidaridad y política social, sino también en cuestiones de la eficacia del Estado para ejercer las políticas, aunque no sean las distributivas, que son responsabilidad suya. O sea, que yo creo que por ahí no podemos ir», finalizó.